

Argentina, una década después

Del «que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacional-popular

MARISTELLA SVAMPA

A diez años de los acontecimientos de 2001 –que se conmemorarán en diciembre próximo–, Argentina parece distante de los días de crisis generalizada, acciones populares callejeras y nuevos *ethos* militantes por fuera del Estado. También parecen lejanos los días de «corralito» bancario y caos económico. En este marco, el artículo plantea una lectura de la década procurando superar los esquemas binarios y ponderando rupturas y continuidades, una discusión acerca del modelo de desarrollo y un retrato de las ambivalencias propias del retorno de lo nacional-popular, de la mano del peronismo, consolidado en el poder y capaz de interpelar a nuevas generaciones de militantes.

■ Una década, tres momentos

Explicar cómo fue que los argentinos realizamos el pasaje del «que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacional-popular no es tarea fácil y merece sin duda un largo análisis y una multiplicidad de niveles de lectura. No es lo que haremos aquí, ya que nos abocaremos a abordar solo algunos de sus aspectos, ligados a los cambios en los lenguajes moviliz-

cionales, las disputas en términos de matrices ideológicas y el corrimiento y la ampliación de las fronteras del conflicto social. Partimos de la base de que si bien los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-) estuvieron lejos de apostar a una refundación política, como sostienen sus defensores, su gestión tampoco puede ser interpretada en términos de continuidad lineal respecto de los

Maristella Svampa: socióloga. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, profesora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y directora del Programa de Estudios Críticos del Desarrollo (PECS).

Palabras claves: hegemonía, peronismo, kirchnerismo, nacional-popular, conflicto social, modelo de desarrollo, Argentina.

Nota: la autora agradece los comentarios y sugerencias de Carlos Janin, Florencia Puente y Marisa Velasco.

años 90¹. En realidad, las ambigüedades, la tensión entre continuidades y rupturas, en fin, los dobles discursos, constituyen un hilo articulador en un escenario en el cual paulatinamente se iría afirmando como elemento central la actualización de la tradición nacional-popular, que posee hondas resonancias en la política argentina.

Como es sabido, la tradición nacional-popular remite, para el caso argentino, al Movimiento Justicialista, fundado por Juan D. Perón en 1946. Pero lo «nacional-popular» es una categoría que reenvía a elaboraciones de Antonio Gramsci². En nuestros análisis, retomamos en parte los aportes de Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero –publicados originariamente en 1986– respecto de su inflexión en América Latina, ligada a la alternativa populista³. Para estos autores, el doble proceso que propone el populismo (constitución del pueblo y construcción de un orden estatal) requiere la inclusión de tres niveles de análisis: el de las demandas y tradiciones nacional-populares, el del populismo como movimiento de nacionalización y ciudadanización de las masas, y el populismo como forma particular del compromiso estatal⁴. En este marco, nos interesa hacer énfasis en la tradición nacional-popular que definimos como una matriz político-ideológica que se inserta en la «memoria mediana» (las experiencias populistas de los años 30, 40 y 50) y tiende a sostenerse sobre el triple eje de la afirmación

de la nación, el Estado redistributivo y conciliador, y el liderazgo carismático junto con las masas organizadas –el pueblo–. Asimismo, si bien en términos generales la dinámica de lo nacional-popular se instala en la tensión entre un proyecto nacionalista revolucionario, conducido por el pueblo junto con su líder, y el proyecto de la participación controlada, bajo la dirección del líder y el tutelaje estatal, es esta última la forma histórica que suele adoptar lo nacional-popular en

1. M. Svampa: «Les frontières du gouvernement de Kirchner» en *Revue du Tiers Monde*, 6-7/2007.

2. La categoría aparece en los *Cuadernos de la cárcel*, definida como «voluntad colectiva» y asociada a la «reforma intelectual y moral», ambas vistas como condiciones de posibilidad de un cambio histórico, a través de un proceso de construcción de hegemonía. Ver A. Gramsci: *La política y el Estado moderno*, Planeta-Agostini, Buenos Aires, 1971; Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero: «Lo nacional-popular y los nacionalismos realmente existentes» en Carlos Vilas (comp.): *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, Conaculta, México, DF, 1994; J.C. Portantiero: «Gramsci en clave latinoamericana» en *Nueva Sociedad* N° 115, 9-10/1991, pp.152-157, disponible en <www.nuso.org/upload/articulos/2041_1.pdf>.

3. E. de Ípola y J.C. Portantiero: ob. cit.

4. Los autores analizan los últimos dos niveles. Desde nuestra perspectiva, es necesario incluir el primer nivel de análisis, el de la tradición nacional-popular y sus sucesivas configuraciones. Por ello utilizamos aquí el concepto de «matriz», que definimos como «aquellas líneas directrices que organizan el modo de pensar la política y el poder, así como la concepción del cambio social». La matriz nacional-popular es una de las que recorren el campo de las organizaciones populares en América Latina. Si bien cada matriz político-ideológica posee una configuración determinada, los diferentes contextos nacionales, así como las tensiones internas, las van dotando, para cada caso, de un dinamismo y una historicidad particulares. M. Svampa: «Mouvements sociaux, matrices socio-politiques et nouveaux contextes en Amérique Latine» en *Problèmes d'Amérique Latine* N° 74, otoño de 2009, pp. 113-137.

los diferentes casos latinoamericanos, y muy especialmente en su versión argentina⁵.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva, en la Argentina de la última década pueden establecerse tres momentos políticos, que se abren con acontecimientos de fuerte impacto social: el primer momento, la rebelión de 2001, caracterizada por una crisis generalizada y un nuevo ciclo de movilización social, cuyo punto de inflexión es la represión del Puente Pueyrredón (2002); el segundo momento, la asunción presidencial de Néstor Kirchner (2003), que generó un nuevo escenario político, interpelando fuertemente a la sociedad y a las organizaciones sociales movilizadas (la vuelta a la «normalidad», la emergencia de un discurso progresista «desde arriba» y el retorno tímido de lo nacional-popular); y por último, el tercer momento, que se abre con el conflicto entre el gobierno nacional y los sectores agrarios (2008) y encuentra una doble inflexión con la aprobación de la Ley de Comunicación Audiovisual (2009) y la muerte repentina del ex-presidente Néstor Kirchner (2010). Caracterizamos este tercer momento (2008-2010) como el de la exacerbación de lo nacional-popular y la tentativa de construcción de una hegemonía.

■ **Del «que se vayan todos»
al surgimiento de un nuevo
ethos militante**

La crisis de hegemonía que golpeó a Argentina a fines de 2001 fue de gran

envergadura, luego de diez años de políticas neoliberales que socavaron y transformaron enormemente las estructuras sociales. Sin duda, estas transformaciones crearon un nuevo umbral desde el cual pensar la sociedad. Sentimiento y realidad coincidían en la desmesura de la crisis, visible en el hundimiento del marco económico que hasta ese momento había regido los destinos nacionales. Argentina había tocado fondo: los sucesivos ajustes, el impensable «corralito» bancario, la ruptura inevitable en la cadena de pago, la multiplicación de las monedas locales en reemplazo de una moneda legal cada vez más escasa, tuvieron su respuesta social en la ola de saqueos, así como en la inolvidable noche de los cacerolazos del 19 de diciembre de 2001. Estas movilizaciones suscitaron la mayor represión desatada desde el poder desde la vuelta a la democracia, con más de 30 muertos y centenares de heridos. La renuncia del presidente Fernando de la Rúa y la sucesión de cuatro presidentes provisionales en tan solo una semana daban cuenta del alcance institucional de la crisis.

En aquel año 2002, «nuestro año extraordinario», parecía abrirse sin embargo una gran oportunidad histórica: la crisis de hegemonía, visible en la desarticulación de un modelo de domi-

5. M. Svampa: «La Argentina: movimientos sociales e izquierdas» en *Entre voces* N^o 5, 1/2006 y «Mouvements sociaux, matrices socio-politiques et nouveaux contextes en Amérique Latine», cit.

nación, tenía su correlato en grandes movilizaciones sociales, que ganaron las calles al grito de «que se vayan todos». En medio de la descomposición económica, Argentina se transformaba en un laboratorio político-social, y esto era ilustrado por la multiplicación de focos de rebeldía, que manifestaban su no resignación, impugnaban las formas convencionales de representación política y buscaban recomponer molecularmente el vínculo social desde abajo. No eran pocos los que se hacían la pregunta acerca de quién de todos o qué espacio de articulación política «desde abajo» podía responder al déficit de legitimación con una propuesta de nueva institucionalidad.

Recordemos que, en los años 90, las políticas neoliberales habían producido una ampliación de las fronteras de la exclusión, delineadas principalmente por la problemática de la desocupación. En un contexto de empobrecimiento y de descolectivización de las clases populares, habían nacido las grandes organizaciones de desocupados (piqueteros), cuyos ejes centrales eran la acción directa (el corte de ruta o piquete), el trabajo comunitario en el barrio, el control de planes sociales otorgados por el gobierno y la democracia asamblearia. Estos actores tuvieron centralidad en el espacio político-social a partir de 1999 y muy especialmente en 2002, a través de las movilizaciones hacia la ciudad de Buenos Aires, con fuertes reclamos orientados al Estado. De modo que,

vista desde abajo, la profunda crisis de 2001-2002 resultaría en el reforzamiento de las organizaciones de desocupados, así como en la emergencia de una multiplicidad de movilizaciones que apelaban a diferentes tradiciones político-ideológicas, tales como la matriz clasista tradicional, la nacional-popular (desconectada, en ese momento, del partido peronista) y la nueva narrativa autonomista, en esos tiempos una matriz en construcción⁶. Muy especialmente esta última fue encontrando su expresión más acabada en las asambleas barriales de las grandes ciudades, así como en las organizaciones de desocupados independientes y los numerosos colectivos culturales de todo el país.

Estas tres matrices estuvieron lejos de articularse. Para decirlo con una metáfora político-ideológica: 2002 fue el año en que el Antonio Negri de la «multitud» le ganó a Gramsci e incluso obtuvo una victoria pírrica frente a Lenin. En efecto, por un lado, la propuesta gramsciana de construcción de un bloque contrahegemónico, promovida por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y parte de sus aliados, no supo ni pudo jugar un rol importante en estos acontecimientos. Su accionar institucional se vio opacado por las multiplicadas acciones directas y la intensa visibilidad que cobraron tanto las organizacio-

6. M. Svampa: «La Argentina: movimientos sociales e izquierdas», cit.

nes piqueteras que respondían a una matriz de izquierda clasista como aquellas que reenviaban a una matriz autonomista. A fines de 2002, la CTA realizó un congreso nacional y estableció que era la hora de devenir un movimiento político-social, a la manera de la Central Única de los Trabajadores (CUT) brasileña. Sin embargo, a esa altura su propuesta ya era una suerte de vía muerta, que descansaba al costado de las formaciones principales, todavía en movimiento.

Por otro lado, la narrativa autonomista se había ido constituyendo en la piedra de toque de la emergencia de una nueva subjetividad militante, sobre todo entre los jóvenes y los críticos de las formas organizativas de la izquierda clasista. Aun si, como bien señalara Martín Bergel, estas reclamaban una suerte de autonomismo «práctico» antes que teórico⁷, dicha narrativa en construcción contaba con *movimientos-faros*, entre ellos, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano (presentado por la vía del Colectivo Situaciones) y exhibía ciertos autores de culto (Negri y John Holloway⁸). Un nuevo *ethos* militante, caracterizado por el rechazo a la democracia delegativa, fue surgiendo al calor de aquellos primeros meses en los que se mezclaban sentimientos de temor e incertidumbre frente a la ausencia de referencias institucionales, y una alegría instituyente de cara a las nuevas experiencias políticas. Las asambleas barriales mostraban que

la crisis era total: como por arte de magia, el nuevo *ethos* destituía la totalidad de poderes causales previos (partidos políticos, sindicatos), incluyendo aquellos que pudieran invocar un saber profesional, una *expertise*, cualquier suplemento de sentido que apuntara a la expropiación de la voluntad política asamblearia o pudiera ser portador de una tentación hegemónica. Había lugar para todos, a condición de que esos lugares significaran la igualación sin más.

Pero las dinámicas sociopolíticas siempre son recursivas, y el devenir autónomo del asambleísmo urbano, disminuido en términos de participación, desgastado por las interminables discusiones políticas y las múltiples escisiones, terminó acorralado por las demandas de normalidad institucional que provenían de una sociedad exhausta por la crisis. Asimismo, la represión del Puente Pueyrredón, ocurrida el 26 de junio de 2002, resultado de una operación conjunta de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la provincia de Buenos Aires, fue un punto de inflexión. Esta asestó

7. M. Bergel: «En torno al 'autonomismo argentino'», 2007, en *Darío Vive*, portal latinoamericano de crítica social y pensamiento plebeyo, <www.dariovive.org/notas/berguel1.html>.

8. La fórmula hollowayana de «cambiar el mundo sin tomar el poder» apuntaba a destituir la posibilidad de pensar en un proyecto de cambio contrahegemónico desde el Estado, al tiempo que ilustraba la consolidación de una subjetividad militante potente y novedosa, que podía reconocerse en el espejo del zapatismo mexicano o en los movimientos alterglobalización.

un golpe duro a las organizaciones piqueteras, sobre todo a las autónomas, de donde provenían Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los dos jóvenes asesinados. El temor a una gran represión, evocando los horrores de la pasada dictadura militar, abrió una gran herida en las organizaciones movilizadas, que encontraría una acelerada confirmación en los sucesivos desalojos y represiones que caracterizaron el final del gobierno provisorio de Eduardo Duhalde (2002-2003).

Al mismo tiempo, como señala Melina Vásquez, el repudio a la represión del Puente Pueyrredón constituyó un disparador para el ingreso de nuevas camadas de jóvenes militantes de clases medias, que se acercaron a las organizaciones piqueteras autónomas, buscando tejer lazos con los sectores populares excluidos⁹. Se consolidaba así una nueva generación militante, la de 2001, articulada sobre la territorialidad, el activismo asambleario, la demanda de autonomía y la horizontalidad de los lazos políticos. Un ritual de viaje los unía en todo el país: el recorrido territorial que iba del centro de la ciudad hacia la periferia, en especial, aquellos que iban hacia los lugares más pobres del conurbano bonaerense. El desafío tenía como corolario la necesidad de la construcción «desde abajo» y la exigencia de la articulación entre política y ética. «Maxi y Darío», quienes en definitiva habían ofrendado su vida en el peor momento de la crisis, aparecían como «mode-

los ejemplares» para esa nueva juventud militante.

El nuevo *ethos* militante, anclado en el activismo asambleario y territorial, más autocrítico y por ende mucho menos hiperbólicamente autonomista que en 2002, se difundió en otros espacios organizacionales, entre ellos, en los numerosos colectivos culturales que comenzaron a desplegarse en el campo de la documentación (videoactivismo), el periodismo alternativo, la educación popular, entre otros. Se expresó incluso en el sindicalismo de base, que comenzó a manifestarse a partir de 2003-2004, con el mejoramiento de los índices económicos y en el marco de la profundización de la precariedad. Surgían así nuevas camadas de jóvenes delegados sindicales que, luego de tantos años de aparente inmovilidad y descreimiento en las organizaciones sindicales, habían revalorizado la acción gremial como herramienta de lucha. Eran en gran parte tributarios de ese *ethos* libertario, partidario de la acción radical, más proclive tanto a las alianzas con las izquierdas como al repudio a las estructuras burocráticas y empresariales.

Posteriormente, la nueva subjetividad militante se haría presente también en las asambleas de vecinos autoconvocados contra la megaminería a cielo

9. «Socialización política y activismo. Carreras de militancia política de jóvenes referentes de un movimiento de trabajadores desocupados», tesis de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), 2010.

abierto. La primera de ellas, en Esquel, en la provincia patagónica de Chubut, había nacido en 2002, en pleno fervor asambleario. A partir de 2004, las asambleas ciudadanas se irían multiplicando a lo largo de 15 provincias, amenazadas por la expansión vertiginosa de la minería transnacional. En este sentido, no es exagerado afirmar que estas asambleas, de carácter policlasista, pero con un protagonismo de las clases medias, son las fieles herederas del *ethos* militante forjado en 2001. En 2006 surgió la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio autonomista en el cual convergen las diferentes asambleas de base, que combina nuevos temas y repertorios de acción, con el rechazo, muchas veces extremo, a la delegación, lo cual suele conspirar contra la posibilidad de consolidar dicha instancia de segundo grado, en función de una lógica de acumulación política.

En suma, no hubo reconstitución política desde abajo, pero el tejido social organizativo cambió, lo que se expresa tanto en la presencia de la matriz clasista como en la expansión de un *ethos* militante autonomista, con fuerte formato territorial y aspiraciones de democratización. Más aún, la emergencia de una nueva generación –la de 2001– abarcó un registro amplio de organizaciones, desde los desocupados, expresiones organizativas de clase media y nuevos delegados sindicales hasta asambleas contra la minería transnacional.

■ La vuelta a la normalidad y la emergencia de un discurso nacional-popular

El devenir nacional-popular del kirchnerismo fue paulatino. A principios de 2003, el declive de las nuevas movilizaciones, así como la fragmentación de las organizaciones de desocupados, fueron diluyendo la expectativa de una recomposición política «desde abajo», para dar paso a una fuerte demanda de orden y normalidad. En este sentido, apenas asumió, Kirchner se hizo eco de este mensaje social, como aparecía ilustrado en su consigna «Por un país en serio, por un país normal».

Una de las características de ese momento inicial fue la configuración de un discurso progresista «desde arriba», facilitada por la emergencia de un espacio progresista a escala regional y el retorno –todavía tímido– de lo nacional-popular, de la mano de la revalorización del rol del Estado. Recordemos que los primeros gestos de Kirchner contribuyeron a reconfigurar el campo político desde la esfera institucional: los cambios positivos en la Corte Suprema de Justicia, la asunción de la política de derechos humanos como política de Estado, la reivindicación de una cierta autonomía de la política respecto de la economía, en el marco del *default* y, por último, la opción por una política económica heterodoxa, signaron sus primeros pasos. Estos gestos interpelaron a

un conjunto de organizaciones sociales, entre las que se destacaron diversos organismos de derechos humanos, que habían sido golpeados duramente por las sucesivas leyes de impunidad (dictadas por Raúl Alfonsín y Carlos Menem), y varias organizaciones de desocupados, ancladas en la tradición nacional-popular, pero desvinculadas –hasta ese momento– del Partido Justicialista (PJ).

Hacia fines de 2004, con la rápida consolidación del gobierno de Néstor Kirchner, el escenario político ya había sufrido grandes reconfiguraciones: sea a través de la integración, sea a través del reflujo y el disciplinamiento, las organizaciones de desocupados ligadas a las organizaciones de la izquierda clasista, así como aquellas pertenecientes a la izquierda independiente y autónoma, fueron resignando la centralidad que tuvieron en la cartografía de las resistencias.

Hubo también cambios importantes en las condiciones económicas internas, luego de la devaluación de la moneda argentina y la salida de la convertibilidad, ya visibles desde mediados de 2003. La Argentina de la posconvertibilidad comenzaba a ser asociada con la reactivación económica e industrial¹⁰. Se operó entonces un primer corrimiento de las fronteras del conflicto social. El contexto de crecimiento económico, sin redistribución y con un fuerte aumento de la pre-

cariedad, marcó el retorno de la conflictividad sindical, de la mano de la tradicional Confederación General del Trabajo (CGT), luego de una década de desmovilización y de una reorientación hacia un sindicalismo de tipo empresarial.

Sin embargo, pese a que en el periodo de posconvertibilidad la reactivación industrial fue notable, en términos comparativos esta ha sido más bien acotada. Ciertamente, el desempeño del sector industrial, con relación a la creación de puestos de trabajo, fue positivo: en el año 2007 la industria llegó a ocupar a 36% de los trabajadores, 7% más que en 2002. Pero este proceso de reindustrialización fue favorecido por el esquema macroeconómico de «tipo de cambio alto y competitivo» –sostenido por intervenciones del Banco Central–. Más allá de esto, las políticas activas hacia la industria fueron escasas y no se formuló una estrategia de industrialización inclusiva y sustentable. Por ende, la reactivación económica y manufacturera que tuvo lugar a partir de 2003 no logró revertir los alcances de los años de desindustria-

10. Con relación a los datos de empleo, se nota un descenso significativo de la tasa de desocupación en el actual milenio (consignado para el tercer trimestre en cada año): en el tercer trimestre de 2003 se registraba 16,3%; 13,2% en igual periodo de 2004; 11,1% en 2005; 10,2% en 2006, y en igual periodo de 2007, 8,1%; 9,1% en 2009 y 7,5% en 2010. Taller de Estudios Laborales (TEL): (2011), *Informe trimestral de estadísticas laborales y económicas*, Buenos Aires, diciembre de 2006 y enero de 2011, <www.tel.org.ar>.

lización neoliberal¹¹. Por otro lado, la dinámica salarial de los últimos años se centró en la recuperación de la participación en las ganancias que los trabajadores habían perdido en 2001, y no ha superado este techo; lo cual explica que, pese a que el índice de desocupación es bajo, existe una proporción importante de la población asalariada que se encuentra bajo la línea de la pobreza¹².

Por último, la supuesta «vía industrial» debe ser relativizada, en la medida en que el crecimiento de la economía aparece ligado a la exportación de *commodities* (principalmente, la soja y sus derivados), favorecida por los altos precios internacionales. Al igual que en otros países latinoamericanos, en los últimos diez años Argentina transitó del Consenso de Washington al «consenso de los *commodities*». Estos cambios en la división global del trabajo han ido configurando en la región latinoamericana un estilo neodesarrollista, de corte extractivista, basado en la apropiación y sobreexplotación irresponsable de los recursos naturales no renovables, por encima de las evidentes diferencias políticas o los signos ideológicos específicos de cada gobierno. En otros términos, más allá de la retórica industrialista en boga, en nombre del nuevo «consenso de los *commodities*» y de sus «ventajas comparativas», los diferentes gobiernos tienden a aceptar como «destino» el orden geopolítico mundial, que históricamente ha

reservado a América Latina el rol de exportador de naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la economía (la reprimarización y las nuevas formas de la dependencia), ni sobre la población y los territorios (nuevas formas de dominación bajo la lógica de la desposesión).

Volviendo a la dinámica política argentina, durante el gobierno de Néstor Kirchner, los movimientos tácticos en busca de una identidad progresista se articularon sobre dos ejes mayores: la reivindicación de los derechos humanos como política de Estado y el latinoamericanismo. Sin embargo, también hubo un intento de construcción de una fuerza transversal progresista. Esta última tentativa, más bien errática y prontamente descartada, otorgaba un lugar a las organizaciones piqueteras deudoras de la matriz nacional-popular, que se integraron al gobierno bajo el nombre políticamente correcto de «organizaciones sociales» (Barrios de Pie, Movimiento Evita y Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat). No obstante, en términos de figuras militantes, estas

11. Daniel Azpiazu y Martín Schorr: *Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2010.

12. En la Argentina actual, la pobreza se ubica aún en 25% de los hogares y, como señala Gabriel Kessler, «en la última medición nacional confiable, la de 2006, el Gini era de 0,48, igual al de 1997». G. Kessler: «Claroscuros de la estructura social. Tendencias contrapuestas en la Argentina del siglo XXI» en *Problèmes d'Amérique Latine*, 10-12/2011, en prensa.

fuerzas no fueron capaces de generar una épica alternativa a la que presentaba la generación de 2001, nutrida en el *ethos* autonomista y la matriz clasista. Ciertamente algunas de las (ex)-organizaciones piqueteras obtuvieron puestos menores dentro del Estado, sobre todo en el área social, pero como lo demuestra la excelente investigación periodística de Christian Boyanovsky, el vínculo que Néstor Kirchner entabló con ellas fue más bien mezquino, plagado de idas y vueltas, que parecían hablar de un no reconocimiento pleno por parte del gobierno del rol de aquellas en el nuevo proceso¹³. Desde nuestra perspectiva, mucho tuvo que ver el rechazo y estigma que medios hegemónicos, clases medias y el propio gobierno habían contribuido a instalar durante la fuerte puja que se llevó a cabo en el espacio público entre 2003 y 2004 con las organizaciones piqueteras opositoras. Pero lo cierto es que ni la reivindicación de las luchas anti-neoliberales de la década de 1990 ni la evocación de un *ethos* setentista alcanzaron para dotar de legitimidad a un actor social que, en definitiva, continuaba siendo visto por una gran parte de la sociedad como «clase peligrosa», «lumpenproletariado residual» o, simplemente, como una expresión del clientelismo de izquierda, amparado por el nuevo gobierno.

En realidad, ya en su primera etapa, el kirchnerismo optó por apoyarse en los sectores sindicales tradicionales.

En 2004, la CGT se unificó bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, quien durante los años 90 encabezó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), nucleamiento sindical peronista donde conviven las apelaciones a la tradición nacional-popular con un sindicalismo de corte empresarial. El fuerte crecimiento que experimentaron los servicios, la cuasidesaparición del sector ferroviario como transporte de pasajeros –luego de la privatización y el cierre de ramales–, el desarrollo del comercio regional, los subsidios del gobierno nacional y, por último, el transporte de soja y otras semillas hasta los puertos para el mercado externo, catapultaron a los sectores transportistas a la cima del poder sindical¹⁴.

Tal como hemos anticipado, una de las contracaras de este fenómeno ligado a las cúpulas sindicales fue el aumento molecular de las luchas protagonizadas por comisiones internas, que lograron poner de manifiesto una pugna intrasindical entre secto-

13. *El aluvión. Del piquete al gobierno. Los movimientos sociales y el kirchnerismo*, Sudamericana, Buenos Aires, 2010.

14. Como señala Martín Armelino, «al igual que los ferroviarios en las primeras décadas del siglo xx bajo la economía agroexportadora o los metalúrgicos en los tiempos de la industrialización sustitutiva de importaciones, la posición estratégica de los camioneros en la actual economía del intercambio de *commodities* los ha convertido en líderes de la acción sindical». V. M. Armelino: «El que se va porque lo echan, vuelve porque lo llaman... Sindicatos y política durante los gobiernos kirchneristas» en *Problèmes d'Amérique Latine*, 2011, en prensa.

res burocráticos y la nueva generación de delegados, muchos de ellos hijos de las revueltas de 2001 y ligados a organizaciones y partidos de izquierda. Entre estas luchas, se destacan aquellas del sector de servicios y transporte (empresas de *call-center*, transporte subterráneo de Buenos Aires, empleados del Casino de Buenos Aires, entre otros), golpeados por el aumento de las condiciones de precariedad laboral.

■ Discursos binarios y exacerbación de lo nacional-popular

El conflicto que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo con los productores agrarios apenas asumió, en 2008, fue la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado nacional-popular. Recordemos que el enfrentamiento se originó a raíz de un aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias, que pasaron de 35% a 44%. De manera inédita, el frente agrario agrupó tanto a las grandes organizaciones (entre ellas, la tradicional Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes propietarios), como a aquellos representantes de los pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina), quienes llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y *lock-outs*), que dejaron al país al borde del desabastecimiento durante 100 días.

Este conflicto puso de manifiesto la importancia de las transformaciones

agrarias ocurridas en la última década y el lugar del modelo sojero en la actual estructura económica argentina. Arrojó a la arena política a los diferentes actores del nuevo modelo agrario, develando su entramado complejo y sus rasgos mayores (manifiestos en la tendencia al monocultivo de soja). Otorgó visibilidad a algunos de los socios «menores» (los pequeños productores, que sostenían los cortes de ruta), al tiempo que iluminó parcialmente la situación de los excluidos del modelo, esto es, las comunidades campesinas e indígenas, que sufren el desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en el Norte argentino.

La dinámica virulenta que adquirió el conflicto económico hizo que este adoptara claras dimensiones políticas: tanto la respuesta inflexible del gobierno (llamándolos «piquetes de la abundancia») como la rápida reacción de sectores de la clase media porteña, que salieron a la calle a apoyar a los sectores agrarios, cuestionando el estilo político autoritario del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado fuertemente en la tradición nacional-popular: civilización o barbarie; peronismo o antiperonismo; pueblo y antipueblo. No importa ya si el gobierno mostró escasa flexibilidad para negociar con las diferentes par-

tes, cimentando de este modo el carácter monolítico del bloque opositor, o si las clases medias volvieron a manifestar inveterados prejuicios racistas y clasistas en relación con las bases populares peronistas. El conflicto fue un parteaguas: en ese marco, el gobierno logró la adhesión activa de un grupo amplio de intelectuales y académicos de corte progresista, llamado Carta Abierta, que salió en defensa de la institucionalidad y realizó una lectura de las movilizaciones agrarias en términos de «conflicto destituyente».

Meses después, el gobierno recobró iniciativa y el esquema binario de lectura se reforzó notoriamente con el conflicto generado por la Ley de Medios Audiovisuales, que esta vez lo enfrentó de forma directa con el multimedios Clarín (que hasta antes de la disputa con los sectores agrarios había sido beneficiado por las políticas del kirchnerismo). Los debates en torno de la nueva ley, en 2009, suscitaron también la adhesión entusiasta de numerosos periodistas, artistas y sectores educativos, que hasta ese momento habían mantenido más bien una relación de apoyo tácito o de consenso pasivo en relación con el kirchnerismo. Como consecuencia de ello, Argentina comenzó a transitar un escenario de polarización político-social, comparable al de otros países latinoamericanos (como es el caso de Venezuela).

Finalmente, la muerte repentina de Néstor Kirchner terminó de abrir por

completo las compuertas a lo nacional-popular en su clásica versión estatista. La conmoción que produjo la pérdida del político que marcó la escena argentina de la última década, así como el temor, por parte de ciertos sectores sociales, de ver desvanecidas las conquistas llevadas a cabo por el gobierno, constituyeron un punto de inflexión¹⁵. Este fenómeno conllevó dos consecuencias mayores: por un lado, consolidó el discurso binario como «gran relato» refundador del kirchnerismo, sintetizado en la oposición entre un bloque popular y sectores de poder concentrados (monopolios, corporaciones, «gorilas», antiperonistas). Como en otras épocas de la historia argentina, los esquemas dicotómicos, que comenzaron siendo principios reductores de la complejidad en un momento de conflicto, terminaron por funcionar como una estructura de inteligibilidad de la realidad política. Por otro lado, se amplió el arco de alianzas, a partir de la incorporación explícita de la juventud –que tuvo notoria presencia en las exequias de Kirchner–. Agrupaciones pequeñas como «La Cábora» (fundada por Máximo Kirchner, hijo del matrimonio presidencial) tuvieron un enorme crecimiento, y otras similares comen-

15. Los festejos masivos del Bicentenario de la independencia también promovieron una mirada positiva hacia el gobierno y contribuyeron al pasaje del consenso pasivo al consenso activo. Para un análisis crítico, v. Norma Giarracca: «El Bicentenario. Miradas desde la Argentina» en N. Giarracca (comp.): *Bicentenarios (otros), transiciones y resistencias*, Una Ventana, Buenos Aires, 2011.

zaron a multiplicarse por todo el país, al compás de una doble militancia: tanto desde altos puestos del aparato del Estado como desde las bases, marcadas por un activismo virtual antes que territorial, desde blogs, Twitter y otras redes sociales.

El fenómeno no deja de ser llamativo si lo miramos comparativamente, pues no son menores las diferencias que separan este *ethos* militante del de la generación de 2001. Aunque ambas se reivindicquen herederas de la generación del 70, la militancia kirchnerista apunta a la revaloración del rol del Estado y combina una buena dosis de pragmatismo político con las clásicas apelaciones a lo nacional-popular (en las que se incluye la defensa del líder como expresión y condensación del proyecto político); mientras que la generación de 2001 reivindica el carácter más genuino del trabajo basista y territorial, y en los casos de la narrativa autonomista, continúa manteniendo una relación conflictiva (aunque no exenta de debates) con la visión de una construcción política desde el Estado. Tampoco podemos asegurar que esta juventud politizada se convierta en una «nueva generación política», dado su carácter incipiente y el impulso que encuentra desde la cima del Estado. El rol que la propia presidenta tiende a otorgarle, tanto en términos discursivos (en nombre de un «trasvasamiento generacional»¹⁶), como prácticos (puestos importantes en las listas de legisladores, que implicaron

un desplazamiento de sindicalistas y de representantes de organizaciones sociales), ha contribuido a resaltar su importancia. No es casual que ellos mismos se piensen como «soldados» de Cristina y a la vez como «cuadros técnicos» del gobierno, cuya función es custodiar y asegurar la continuidad del proyecto¹⁷.

■ La ampliación de las fronteras de los conflictos sociales

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner perdió la pulseada política con los sectores agrarios en el Parlamento, en julio de 2008, y atravesó un periodo de zozobra, visible en la derrota en las elecciones parlamentarias de 2009. Sin embargo, la recom-

16. Bergel sostiene que este es un «trasvasamiento generacional invertido»: «La idea es sencilla: mientras la generación del 70 se apropió de la interpelación que desde el exilio hacía Perón para duplicar su apuesta política, las más caracterizadas expresiones de la militancia juvenil kirchnerista toman la posta con modestia y, sobre todo, sin la inventiva de sus progenitores políticos. Si en los 70 las juventudes eran un polo activo, hoy parecen ser apenas una continuación pasiva de lo generado por sus mayores. He allí la inversión de roles. Mientras la 'JotaPé' de los 70 inscribió la retórica del trasvasamiento generacional del viejo general en un movimiento que inauguró la posibilidad efectiva de asociación entre peronismo y socialismo, de las nuevas camadas de jóvenes dirigentes κ se escucha poco más que un llamado abstracto y poco seductor a 'defender el modelo'. M. Bergel: «Generación e invención de la política», 2011, mimeo.

17. Agradezco a M. Vásquez haberme proporcionado entrevistas a militantes y cuadros de organizaciones juveniles kirchneristas, entre ellas la agrupación «La Cántora», donde se observan estos rasgos.

posición política fue rápida, gracias a una conjunción de políticas activas llevadas a cabo desde el Estado, entre ellas, la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley de Matrimonio Igualitario (que incluye a personas del mismo sexo), la nacionalización del sistema previsional y, sobre todo, la Asignación Universal por Hijo, una medida promovida desde hacía muchos años por partidos y organizaciones sociales progresistas opositoras, que la presidenta sancionó por decreto.

En segundo lugar, las acciones del nuevo sindicalismo de base –ligado a la matriz clasista– encontraron un punto de inflexión dramático. En octubre de 2010, la puja intersindical se cobró una víctima fatal: Mariano Ferreyra, un militante de izquierda perteneciente a un partido trotskista (Partido Obrero) fue asesinado en el marco de una protesta que exigía la incorporación con plenos derechos de sectores tercerizados de los servicios ferroviarios. Este crimen, que llevó al encarcelamiento del secretario general de la Unión Ferroviaria, uno de los más poderosos gremialistas de la CGT, puso al descubierto la oscura trama existente entre precarización, lógica empresarial, patotas sindicales y apoyos del gobierno nacional y abrió fuertes interrogantes sobre la calidad y la extensión del modelo laboral promovido por el gobierno. A ello se sumó la ruptura de la CTA: el pluralismo ideológico de la central

encontró escollos insalvables en la creciente división interna entre sectores oficialistas y aquellos opositores al gobierno.

Por otro lado, aunque las estadísticas de la protesta suelen subrayar que, a diferencia de los años 90, en los ocho años que lleva en el poder el kirchnerismo disminuyeron las impugnaciones al modelo económico y volvieron a emerger los pedidos típicos de la movilización obrera por salarios y mejoras en las condiciones de trabajo, esta lectura es parcial. Se ha visto interpelada por la explosión de conflictos territoriales vinculados a la disputa por la tierra y la vivienda, así como por las luchas en defensa del territorio. Estos conflictos reenvían tanto a una demanda acumulada de viviendas, como al creciente desplazamiento que sufren masas rurales y urbanas, pueblos originarios y campesinos, a raíz de la implementación de modelos productivos ligados al agronegocio, megaemprendimientos turísticos y minería a cielo abierto, entre otros, que exigen el acaparamiento de tierras. Estas problemáticas adoptan dimensiones más dramáticas si hacemos referencia a las organizaciones y pueblos indígenas (como la comunidad Qom, en la provincia de Formosa), que han protagonizado en años recientes una sostenida resistencia a los desalojos y han sufrido diferentes formas de criminalización y represión, incluyendo el asesinato.

Asimismo, ligada a estos procesos recientes, ya hemos mencionado la emergencia de asambleas de vecinos autoconvocados en contra de la megaminería transnacional. Al igual que en otros países latinoamericanos, como Perú, Ecuador y Guatemala, este tipo de movilizaciones socioambientales se localizan en pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana. Pese a las asimetrías existentes, entre 2003 y 2008 estos movimientos han logrado la sanción de leyes de prohibición de la minería a cielo abierto (con algún tipo de sustancia contaminante) en siete provincias argentinas¹⁸. En este campo, uno de los avances más importantes fue la sanción de una Ley de Protección de Glaciares, en septiembre de 2010, luego de que fuera vetada por la presidenta en 2008, lo cual puso de manifiesto la influencia de los grandes intereses mineros (entre ellos, de la compañía canadiense Barrick Gold, cuya actividad se vería comprometida por la aplicación de la ley)¹⁹.

■ El peronismo como hegemonía

Varias hipótesis recorrían el escenario político en los primeros años del siglo XXI argentino. Para algunos, era previsible que las formas políticas que se multiplicaron a partir de diciembre de 2001 no podrían sostener un eterno estado de efervescencia y fracasarían en su intento de recomposición política desde abajo. Como hemos señalado, parte de ese fracaso

se debió tanto a la tentación hegemónica de la izquierda clasista como a la escasa aspiración de construir una nueva institucionalidad estatal que expresaba el *ethos* autonomista.

Aun así, en medio de la crisis, pocos auguraban una rápida recomposición política desde arriba. Aunque el sistema político partidario no había estallado, frente a la aguda crisis de representación se apuntaba a un cierto recambio de las elites políticas. Esto no sucedió finalmente, pero tanto el colapso de la coalición gobernante en 2001 (la alianza entre la tradicional Unión Cívica Radical y sectores progresistas) como la resolución posterior de la crisis fortalecieron la hipótesis de que el peronismo es el único partido político que puede asegurar gobernabilidad, en

18. M. Svampa y Mirta Antonelli: *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, Biblos, Buenos Aires, 2009.

19. La ley prohíbe cualquier actividad extractiva en 1% del territorio nacional (zona de glaciares y periglaciares) y su sanción fue el producto de una laboriosa acción transversal realizada por organizaciones ambientalistas, asambleas ciudadanas, sectores políticos de centroizquierda e intelectuales ligados a las luchas ambientales, en medio de un intenso *lobby* minero. Sin embargo, la ley fue prontamente judicializada y su reciente reglamentación confirma la escasa voluntad del gobierno nacional y las diferentes instituciones del Estado para hacerla efectiva, lo que permite el continuo avance de los proyectos mineros. Asimismo, todo parece indicar que luego de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner (octubre de 2011) y la consolidación de varios gobernadores de provincias mineras, habría un avance de los proyectos en varias provincias argentinas que hoy cuentan con leyes de prohibición de la minería a cielo abierto.

medio de una sociedad atravesada por múltiples conflictos. Sin embargo, en los primeros años del nuevo siglo, bien podía pensarse que mucha agua había corrido bajo el puente peronista y que el neoliberalismo había dejado marcas indelebles en la memoria militante de los argentinos. Más simple: parecía inconcebible que luego del notable giro neoliberal del peronismo en los años 90, que se tradujo en una profunda crisis de la militancia política y en un gran desdibujamiento en términos de contracultura política, este pudiera reactualizar y potenciar los componentes nacional-populares, visibles en la revaloración del Estado, la centralidad del líder y el rearmado de un aparato militante (sindical, social, político y cultural).

En contraste con Eduardo Duhalde y su fórmula «*default* más represión», Néstor Kirchner, el presidente inesperto, propuso una fórmula viable y atractiva que combinaba el reciente progresismo latinoamericano con apelaciones tradicionales (pragmatismo político, concentración de poder, subordinación de los actores al líder, entre otros), en un contexto económico favorable. Cabe observar en retrospectiva que, desde el retorno a la institucionalidad democrática, en 1983, el peronismo gobernó 20 sobre 28 años, y que ha sido sucesivamente neoliberal –en los 90, bajo las dos gestiones de Carlos Menem–, progresista y tendencialmente nacional-popu-

lar –desde 2003, con Néstor Kirchner como presidente– y exacerbadamente nacional-popular desde 2008 –bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner–. Como afirma Juan Carlos Torre, en realidad el peronismo es un sistema político en sí mismo, pues reúne a la vez gobierno y oposición²⁰. Un ejemplo reciente ilustra lo dicho: en las primeras elecciones generales primarias, realizadas en agosto de 2011, las corrientes que se reivindicaban dentro del campo peronista reunieron en total 70% de los votos válidos emitidos. 50,4% votó por la actual presidenta, anticipando su reelección. Este fenómeno tiene su contracara también en la creciente división de la oposición, tanto dentro del peronismo más conservador, de los sectores de derecha, como en la volatilidad de los proyectos alternativos de centroizquierda. En 2011, el único triunfo que la oposición puede mostrar como incontestable es la reelección del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien se perfila como el candidato de los sectores de derecha para las elecciones de 2015.

Por primera vez en la historia argentina, el partido peronista (en su versión kirchnerista) gobernará por 12 años consecutivos, algo que ni el mismísimo Juan D. Perón logró, ya

20. «Los desafíos de la oposición en un gobierno peronista» en J.C. Torre et al.: *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1999.

que gobernó entre 1946 y 1955, año en que fue derrocado por un golpe militar. Mucho menos podía esperarse tal continuidad en los años 70, cuando la inestabilidad institucional y la violencia política eran parte del clima de época.

Nuevamente, y mucho más que otros populismos latinoamericanos, el peronismo probó ser capaz de contener las más diversas corrientes político-ideológicas en su seno, así como volvió a dar pruebas de una gran productividad política. No es extraño entonces que, debido a una combinación de lógica política y estrategia adaptativa, propia de la amplitud y la plasticidad de su marco ideológico, las mismas personas que fueron fervorosamente neoliberales en una etapa pudieran devenir nacional-populares en la siguiente. Con los años, el éxito económico del gobierno y la posterior ampliación de un sistema de alianzas en clave nacional-popular (no solo desde el sindicalismo tradicional, sino también desde el ámbito de la cultura y la educación, y la nueva militancia política juvenil), con la consiguiente reducción y simplificación del espacio político, terminaron por ensanchar las espaldas del proyecto político gubernamental, con ingentes bases provenientes de las clases medias urbanas. Asimismo, por primera vez en su historia, desde el poder, el peronismo parecería superar la oposición entre pueblo y cultura, entre masas e intelectuales,

que tanto ha sobrevolado como maldición sobre anteriores experiencias nacional-populares.

En el orden de los «populismos realmente existentes», la actualización de lo nacional-popular, realizada a través de la profundización de los antagonismos y la activación de estructuras de inteligibilidad binarias, se halla más cerca de las clásicas versiones organicistas de la hegemonía que de una visión pluralista. No obstante, aunque la matriz nacional-popular puede reclamar hegemonía (asentada sobre todo en una construcción cultural-mediática), se muestra incapaz de aglutinar y contener todos los frentes de conflicto y todas las formas de expresión de lo popular²¹. La explosión de una conflictividad ligada a las políticas de mercantilización de las tierras, en la que se mezclan fenómenos como la urbanización forzada con la concentración de la tierra, la expansión del agronegocio y la minería transnacional, revelan algo más que el costado «débil» del gobierno: en realidad, estas políticas forman parte del sistema de dominación; son sostenidas y promovidas desde el aparato estatal y

21. La permanencia de la matriz autonomista (en organizaciones sociales) e incluso la clasista, ligada a los partidos de izquierda, es algo más que la expresión de formas organizacionales y partidarias residuales o recesivas: es parte constitutiva del tejido organizativo popular y no es casual que aparezca asociada a aquellos conflictos o «modelos» que el discurso oficial intenta borrar o denegar.

marcan la profundización de una lógica de desposesión, en una perturbadora continuidad con lo sucedido en los años 90.

Una particularidad que afianza la construcción hegemónica es que, en el campo de las luchas, la coexistencia actual entre modelos de desarrollo diferentes (industrial/servicios; agronegocio/minero) se expresa a través de una gran desconexión: así, existen pocos puentes entre las actuales luchas sindicales y las disputas por la tierra y el territorio. Entre otros, uno de los factores que agrava la desconexión es la acentuación de una retórica nacional-popular, en clave desarrollista, que potencia los rasgos corporativos de los sindicatos y acentúa la incomprensión hacia aquellos sectores que cuestionan los modelos minero y de agronegocio. En este marco, no es casual que los sectores intelectuales kirchneristas y la nueva juventud política militante tiendan a mantener «blindado» el discurso frente al carácter nodal de estas problemáticas, negando la responsabilidad gubernamental respecto de la lógica de desposesión que caracteriza determinadas políticas de Estado, y a subrayar, en contraste, el peso de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.

Todo indica que, en los próximos años, la coexistencia entre dinámica nacional-popular y acentuación de la lógica de desposesión tenderá a agravarse, lo cual coloca a Argentina en una situa-

ción por demás frágil y peligrosa. Cabe destacar que en el último año hubo 15 muertos por represión, en gran parte ligados a conflictos por la tierra y la vivienda. En este sentido, si bien los gobiernos de los Kirchner no utilizaron la represión como «política de Estado», no es menos cierto que esta aparece hoy ampliamente federalizada. Más claro: son los gobiernos provinciales –muchos de ellos alineados con el oficialismo– los que apelan a la represión a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias privadas, contra aquellos que cuestionan una política de acaparamiento de tierras, y por ende, directa o indirectamente recusan la expansión de modelos productivos avalados y promovidos de manera activa por políticas nacionales. Existe, como tal, una clara responsabilidad del gobierno nacional, cuyo sistema de mediaciones y entramados de poder aparece por lo general desdibujado y que los hechos de represión tienden a iluminar de manera cada vez más dramática.

Está por verse qué pasos seguirá la nueva juventud militante frente a la dimensión conflictiva que cobre el avance de la dinámica de desposesión y qué capacidad de absorción y neutralización de las disputas (sociales, políticas y económicas) mostrará un gobierno cuya presidenta, luego de 2011, ya no tiene posibilidades de ser reelegida. Un escenario atravesado por conflictos y la sucesión futura dentro del peronismo abren así nuevos interrogantes sobre el devenir de lo nacional-popular en Argentina. ☐